



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a diez de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La presente causa se inició a fojas 1 y siguientes, por Mauricio Daniel Sandon Orellana, cédula nacional de identidad N°10.693.587-4, domiciliado en calle Brasilia N°1741, Villa Ascotan, Calama, quien deduce reclamo de nulidad de elección de directorio en la Asociación Indígena Valle de la Luna, ubicada en reserva nacional Los Flamencos, comuna de San Pedro de Atacama, realizada el día 18 de noviembre de 2022, representada por su actual presidente, Diego Andrés García Rivera, solicitando la nulidad del acto eleccionario, por una serie de irregularidades ocurridas.

En apoyo de sus pretensiones, adjunta los siguientes documentos: Un certificado electrónico de personalidad jurídica del directorio, de fecha 10 de junio de 2021; una carta de solicitud de antecedentes enviada a la comunidad de San Pedro de Atacama, con fecha 21 de noviembre de 2022; una copia de los estatutos de la referida asociación; un certificado médico correspondiente a María Bernal Tejerina, de fecha 14 de noviembre de 2022; y una ficha de epicrisis perteneciente a Isabel Bernal Tejerina, de fecha 27 de noviembre de 2022.

A fojas 29 y siguientes, consta a través de Ord. N°1541/2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, que la municipalidad de San Pedro de Atacama, cumplió con la notificación y publicación del reclamo establecidas en la Ley N°18.593, de los Tribunales Electorales Regionales.

A fojas 53 y siguientes, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, oficina de San Pedro de Atacama, mediante Ord. N°200, de fecha 30 de diciembre de 2022, remite los siguientes documentos: Acta de elección de directorio de fecha 15 de noviembre de 2022; registro de socios que sufragaron en la elección; registro de socios actualizado que lleva dicha oficina; estatutos de la referida organización; y certificado de vigencia de la directiva saliente.

A fojas 73 y siguientes, se tiene por contestada la reclamación por parte de la reclamada, representada en autos, por la abogada Bárbara Hernández Valenzuela. En sustento de su defensa, adjunta los siguientes instrumentos: 6 certificados electrónicos de personalidad jurídica de las comunidades atacameñas de San Pedro de Atacama, Larache, Coyo, Solor, Quitor, Séquitor y Checar, todos ellos, de fecha 26 de diciembre de 2022; carta remitida por Pamela Ibarra Herrera, en representación de la comunidad de San Pedro de Atacama, a la Asociación Indígena Valle de la luna, de fecha 15 de





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

noviembre de 2022 más un extracto de acta de reunión de 4 de junio de 2022; acta de reunión auto convocada de fecha 15 de noviembre de 2022; un certificado electrónico de personalidad jurídica de la señalada asociación, de fecha 25 de noviembre 2022; captura de pantalla de conversaciones vía WhatsApp enviadas a grupo denominado “valle de la luna 2020”; email de fecha 7 de noviembre de 2022, enviado desde el correo electrónico de la referida asociación a los correos de notificación de las 6 comunidades; carta citando a asamblea para el 7 de noviembre de 2022, emitida con fecha 20 de octubre de 2022; email recordatorio de asistencia a asamblea del 7 de noviembre de 2022, enviado desde la de asociación a los correos de contacto de las 6 comunidades integrantes; citación a asamblea programada para el 28 de noviembre de 2022, emitida con fecha 15 de noviembre de 2022; email de fecha 15 de noviembre de 2022, adjuntando carta de suspensión de asamblea a realizarse el mismo día, reprogramándola para el 28 de noviembre de 2022; citación emitida con fecha 28 de noviembre de 2022, convocando a asamblea para el 20 de diciembre de 2022; carta referente a entrega de cargo de fecha 5 de diciembre de 2022; carta relativa a entrega de llaves, de fecha 22 de diciembre de 2022; carta enviada por María Bernal al directorio de la señalada asociación, recepcionada con fecha 7 de diciembre de 2022; carta de respuesta a María Bernal, de fecha 9 de diciembre de 2022; copia de los estatutos de la referida organización; carta de renuncia presentada por Jimena Cruz y Marlene Ramos a la Asociación Indígena Valle de la Luna, de fecha 5 de agosto de 2020; certificado de personalidad jurídica de la comunidad San Pedro de Atacama, de fecha 14 de febrero de 2022.

A fojas 157 y siguientes, consta, con el número de Rol 37/2022, reclamación de nulidad electoral en contra de la Asociación Indígena Valle de la Luna, deducida por María Bernal Tejerina, empresaria, cédula nacional de identidad N°17.655.356-1, domiciliada en Valle de la Luna, sector 6, comuna de San Pedro de Atacama, representada en autos por el abogado Ronald Sanhueza Castillo, acción que se ejerce respecto del acto eleccionario efectuado el día 18 de noviembre de 2022, y en el cual se eligió a la nueva directiva de la asociación, solicitando la nulidad de la elección impugnada, en que mediante un procedimiento absolutamente ilegal se eligió al nuevo directorio.

En dicha reclamación, se acompañan los siguientes instrumentos: Un certificado de personalidad jurídica del directorio por el período 2020-2023; una copia de los estatutos; un certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

referente a la nueva directiva; y una copia de correo electrónico de fecha 5 de diciembre de 2022, remitido por los representantes de la comunidad atacameña de Séquitor y Checar.

A fojas 188 y siguientes, consta a través de Ord. N°1542/2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, que la Municipalidad de San Pedro de Atacama, cumplió con la notificación y publicación del reclamo establecidas en la Ley N°18.593, de los Tribunales Electorales Regionales.

A fojas 311 y siguientes, se tiene por contestada la reclamación por parte de la reclamada, representada en autos, por la abogada Bárbara Hernández Valenzuela, quien adjunta los mismos instrumentos de fojas 73 y siguientes. En esa misma resolución, el Tribunal ordena la acumulación de la causa Rol 37/2022 a la causa Rol 36/2022.

A fojas 315 y siguientes, por resolución de fecha 23 de enero de 2023, se recibe la causa a prueba, resolución notificada por el estado diario a los reclamantes y personalmente a la reclamada, conforme a resolución de fojas 320.

A fojas 321, la parte reclamada por intermedio de su apoderada, presenta lista de testigos.

De fojas 324 a 335, rola testimonial de la reclamada en la que deponen Guadalupe Del Carmen Anza Anza y Marisol Sabina Flores Mamani.

A fojas 336, se ordena traer los autos en relación.

A fojas 340, esta causa quedo en acuerdo.

CON LO RELACIONADO YCONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Mauricio Daniel Sandon Orellana, interpuso reclamación de nulidad en contra de la elección de directorio, celebrada el día 18 de noviembre de 2022, en la Asociación Indígena Valle de la Luna, comuna de San Pedro de Atacama, solicitando la nulidad del acto eleccionario, en virtud de los siguientes fundamentos.

En cuanto a los hechos, expone que, con fecha 4 de diciembre de 2022, el reclamante se entera por terceras personas que la asociación cuenta con un nuevo directorio, sin haber sido notificado él como tesorero vigente de esta nueva elección.

Indica que en la última reunión de fecha 7 de noviembre de 2022, la socia Pamela Ibarra, expone que la presidenta, María Bernal Tejerina y la vice-presidenta, Carolina Mamani Rojas, fueron sancionadas al interior de la comunidad de San Pedro de Atacama, privándolas de tener la representatividad de la misma ante cualquier organización, por lo





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

mismo, señala que ellas deben dejar de pertenecer al directorio de la reclamada. Agrega que, en ese momento, no se tomó ningún acuerdo ya que, el abogado de la asociación, aconseja que se deben presentar los documentos de respaldo. Señala el reclamante que, él solicitó a través de carta y correo electrónico la información correspondiente a la referida comunidad. Como esa reunión se alargó demasiado, acordaron posponerla para el 15 de noviembre de 2022. Llegado el referido día, la presidenta María Bernal Tejerina presenta un certificado médico, aduciendo que su salud no es compatible para presentarse a la reunión, postergándose la misma para el 28 de noviembre 2022. En esa fecha, la hermana presenta una emergencia de salud, por lo que María Bernal debe trasladarse urgentemente a Calama para apoyarla, debido a esto la reunión se vuelve a postergar, esta vez para el 20 de diciembre de 2022 en la cual se pretende llevar a cabo un nuevo proceso electoral apegado a los estatutos.

El reclamante concluye que las personas que organizaron este nuevo proceso electoral actuaron de mala fe, no se acogieron a los estatutos, realizaron un proceso cerrado, convocando sólo a personas de su interés y dejando excluidos a socios activos.

En cuanto a los vicios específicos que denuncia, señala que: 1) El directorio anterior tenía vigencia hasta marzo de 2023; 2) No existe un documento legal que, a la fecha demuestre que ambas dirigentes se encontraban sancionadas; 3) Se dejó a muchos socios excluidos de las elecciones; 4) Se realizó el proceso electoral sin ninguna convocatoria, como lo establecen los estatutos; y 5) Se excluyó al reclamante de ser un posible candidato, además nunca se le notificó sobre un nuevo proceso electoral.

Termina, señalando que los hechos antes descritos, contravienen lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, 16, 17, 22 y 30 de los estatutos.

Por tanto, solicita, declarar la nulidad de la elección impugnada, ordenando realizar una nueva dentro del plazo que el Tribunal determine.

SEGUNDO: Que por su parte María Bernal Tejerina, representada por el abogado Ronald Sanhueza Castillo, funda su reclamación, señalando que con fecha 4 de diciembre de 2022 recibe noticias por parte de terceros que la asociación indígena que representa cuenta con un nuevo directorio, lo que en su calidad de presidenta vigente ignora por completo. Tampoco los miembros de su directiva ni algunos miembros de la organización que consultó tenían noticia de la supuesta elección.





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Menciona que, en la última reunión convocada y celebrada el 7 de noviembre de 2022, la socia Pamela Ibarra, en representación de la comunidad de San Pedro de Atacama, refiere que la reclamante y Carolina Mamani habrían sido sancionadas por la asamblea de aquella comunidad, quitándoles la representatividad de la misma ante cualquier entidad, planteando que las mismas deberían salir del directorio de la asociación. Ante tal solicitud, la asamblea no toma ninguna resolución y se procedió a solicitar documentos formales que permitieran respaldar dichas afirmaciones, programándose una nueva reunión para el día 15 de noviembre de 2022 en la cual sería tratado este punto, entre otros.

Llegado el día 15 de noviembre, la reclamante presenta un certificado médico que le impide apersonarse a la misma, postergándose para el 28 de noviembre, sin embargo en aquella fecha su hermana sufre una emergencia de salud, por lo que debe trasladarse a Calama para apoyarla. Así la reunión, se vuelve a posponer, esta vez, para el día 20 de diciembre de 2022.

Refiere que, fue en ese estado de cosas, en que con fecha 4 de diciembre, se enteró por terceros de la existencia de una supuesta elección ya realizada, en que se habría elegido una nueva directiva, al margen de todo proceso legal y reglamentario, pues se realizó sin haber sido llamado por quien correspondía, sin notificación ni participación de miembros con voz y voto, sin que se pudieran presentar otros candidatos a la dirigencia y sin que se efectuara una votación con un mínimo de apego a los estatutos.

Es más, indica que, con fecha 5 de diciembre de 2022 recibe un correo electrónico mediante el cual la presidenta y el secretario de la comunidad atacameña de Séquitur y Checar le piden informar y explicar el por qué se habría realizado la elección sin su conocimiento y citación.

Por tanto, solicita declarar la nulidad de la supuesta elección impugnada, en que mediante un procedimiento ilegal se eligió una nueva directiva, ordenado también la cancelación de inscripción de la misma ante la corporación nacional de desarrollo indígena.

TERCERO: Que las respectivas contestaciones de la parte reclamada, representada en autos por la abogada Bárbara Hernández Valenzuela, solicitaron el rechazo de las reclamaciones, alegando en síntesis que, la Asociación Indígena del Valle de la Luna se constituye un 27 de enero de 2005, conforme a los requisitos y





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

procedimientos especiales establecidos en la Ley N°19.253. Agregando que, esta organización, está compuesta por los directorios elegidos en las comunidades indígenas de San Pedro de Atacama, Coyo, Solor, Quitor, Larache, Séquitor y Checar.

La reclamada, apoyándose en el estatuto de la asociación, específicamente en el artículo 5, aduce que la reclamación debe ser rechazada, debido a que María Bernal Tejerina, conjuntamente con Carolina Mamani, ya no integran ni ejercen cargos directivos dentro de la comunidad indígena de San Pedro de Atacama. Lo anterior, debido a que con fecha 24 de abril de 2022, resulto electa una nueva directiva al interior de esa agrupación. Sin embargo, la reclamante continuó ejerciendo el cargo de secretaria hasta finales de mayo de 2022 debido a atrasos injustificados en la entrega de la documentación.

Aduce que, con fecha 4 de junio de 2022, la comunidad de San Pedro de Atacama celebró una asamblea en la cual se sancionó a la reclamante y a todos los miembros del directorio saliente por la demora en la entrega de la documentación.

La sanción, consistió en que no podrán representar a la organización ante cualquier entidad, pública o privada. Así como tampoco podrán ser candidatos a directores de la comunidad por el lapso de 2 años.

Añade que, con fecha 15 de noviembre de 2022, consta una carta dirigida a la reclamada extendida por la Sra. Pamela Ibarra, presidenta de la comunidad de San Pedro de Atacama, en la cual se informa de los antecedentes que llevaron a aplicar la sanción que afecta a la reclamante y a los demás miembros del directorio saliente.

Expone, además que, en reunión de la asociación realizada el 28 de junio de 2022 en la comunidad de Solor se da a conocer esta información y la reclamante se compromete a hacer entrega del cargo el 30 de agosto de 2022, lo cual no aconteció. Posteriormente, se les cita a una reunión para el 7 de noviembre de 2022 en la cual al leer el acta de la sesión anterior no consta el compromiso de la presidenta ante lo cual se vuelve a mencionar el asunto de la sanción que le afecta y la necesidad de convocar a nuevas elecciones.

Así las cosas, con fecha 15 de noviembre de 2022, conforme a lo previamente acordado por la asamblea del Valle de la Luna en reunión del 8 de noviembre, se realizó una reunión auto convocada, debido a que la ex presidenta conociendo de la situación que le afectaba no dispuso del cargo voluntariamente.





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Narra que, en dicha reunión, se encontraban los directores de cada una de las comunidades que conforman esta asociación, en ella los socios expresan las razones por las cuales ambas dirigentes deben dejar sus cargos, se citan las diversas reuniones convocadas para esos efectos y la asamblea aplica por unanimidad la causal de inhabilidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 N°3 de los estatutos.

Por otra parte, la reclamada señala que, los reclamantes omiten que el ex directorio de esta asociación, estaba compuesto en un principio por 6 personas, de las cuales 3 renunciaron. Detallando que, Jimena Cruz y Marlene Ramos de la comunidad de Séquitor y Checar renunciaron el 5 de agosto de 2020, y Yesenia Rodríguez de la comunidad de Coyo renunció en el mes de enero de 2022. Quedando tan solo la directiva compuesta por 3 personas: María Bernal Tejerina, Carolina Mamani Rojas y Mauricio Sandon Orellana, permaneciendo tan solo dos organizaciones, representadas en dicha asociación, sin contrapesos democráticos y en abierta contravención a los estatutos.

Termina señalando que la elección del 15 de noviembre de 2022, es el resultado del respeto a la deliberación democrática de sus socios, ya que la reclamante se encontraba ante un mandato revocado por su respectiva comunidad, perdiendo la calidad de socia y la representatividad de la misma ante cualquier organización.

En ese sentido, en aquella asamblea se procede a tomar en consideración los artículos 5 y 22, llevándose a votación en primer lugar, la inhabilidad sobreviniente de la ex presidenta y ex vice presidenta, aprobándose por unanimidad, luego se procede a la elección de un nuevo directorio, el cual queda constituido por 6 personas, y por último se procede a constituir la Comisión Fiscalizadora de Finanzas con 3 representantes de las comunidades.

Por tanto, conforme a los antecedentes mencionados, solicita el rechazo de la reclamación, ya que la nueva directiva ha sido establecida en un procedimiento absolutamente legal y ajustado al estatuto de la asociación.

CUARTO: Que, a fojas 315 y siguientes, se fijan como hechos sustanciales y controvertidos, los siguientes: **1.** Día en que se llevó a cabo la elección de la directiva que se reclama de nulidad. Hechos y circunstancias; **2.** Efectividad que en la elección reclamada se cumplieron los requisitos estatutarios y legales para su convocatoria. Hechos y circunstancias; **3.** Efectividad que María Bernal Tejerina y Carolina Mamani Rojas, ambas dirigentes de la Asociación Indígena Valle de la Luna fueron sancionadas por la asamblea de la comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, privándolas de la





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

representatividad de dicha organización ante cualquier entidad. Hechos y circunstancias; y 4. Efectividad que en el proceso electoral se ha incurrido en algún vicio, defecto o ilegalidad que conduzca a la declaración de nulidad del mismo. Hechos y circunstancias.

QUINTO: Que la reclamada rindió prueba testimonial en la que deponen las siguientes personas: Guadalupe Del Carmen Anza Anza y Marisol Sabina Flores Mamani.

La primera de los testigos, declara, en síntesis que, la reunión fue llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2022, fue citada por la ex presidenta, María Bernal, sólo que, ella a último minuto la suspendió, y la testigo sólo se enteró cuando ya había llegado a la reunión. Agrega que, los socios apoyándose en el estatuto y en la mayoría de los que estaban presentes, decidieron hacer esta reunión de todas formas y proceder a la elección del directorio.

En cuanto a la forma en que fue convocada esta reunión, expone que fue a través de mensaje de texto que se remite al WhatsApp que tienen en la organización, pero que, además sabe, que la presidenta o los directores deberían enviar la información al correo de cada comunidad, sólo que a ella no le consta, porque ese correo lo revisa sólo la presidenta de su comunidad.

Menciona que, el ex directorio estaba en conocimiento de la fecha en que se desarrollaría la reunión, porque fue la propia presidenta la que los convocó en conjunto con Carolina Mamani. Agrega que, esta reunión más que organizarla fue una continuación de una reunión realizada en los primeros días de noviembre.

Respecto del punto dos, sostiene que, por su parte y por todos los que estuvieron presente en esa reunión, cree que, si se cumplieron las reglas o normas establecidas en el mismo estatuto, porque ellos fueron citados a esa reunión con previo aviso. Además, la Sra. María Bernal estaba en conocimiento que se debían hacer elecciones desde hace bastante tiempo, incluso recuerda que, en una reunión de junio o julio, se había planteado por ella misma que entregaría el cargo el día 30 de agosto de 2022 y que eso no sucedió.

En cuanto al punto tres, refiere que ambas eran dirigentes de la comunidad de San Pedro de Atacama y tiene el conocimiento de que estarían inhabilitadas por ésta para ocupar cargos en cualquier otra organización, conoce plenamente esa decisión porque fue expuesta en una de las asambleas de la Asociación Valle de la Luna.





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

La segunda de los testigos, expone, en resumen que, se realizó bajo una convocatoria realizada con todos los participantes que son socios de la asociación, se hizo eso, porque los directivos anteriores no estaban en condiciones de seguir siendo parte del directorio, ya que dos de ellos estaban sancionadas por su propia comunidad por la mala gestión y mala administración que ellos tuvieron.

Respecto del punto dos, agrega que, por supuesto que fue legal, porque estaban representadas las seis comunidades. Además, señala que la asamblea es el órgano resolutorio y la misma, le pedía muchas veces la elección del directorio y como no se llevó a cabo, tuvieron que auto convocarse y elegir ellos una nueva directiva para la asociación.

Finalmente, referente al punto tres, manifiesta que, sí, es efectivo. Ellos entregaron a su comunidad un documento donde estaba escrito las sanciones que ellas tenían, por lo tanto, no podían representar a la comunidad del pueblo en un directorio de la Asociación.

SEXTO: Que, con fecha 15 de noviembre de 2022, se realizó el proceso eleccionario en la Asociación Indígena Valle de la Luna, de la comuna de San Pedro de Atacama, con la participación de 16 personas, conforme a acta de reunión auto convocada de igual fecha y listado de asistencia, remitida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a fojas 53 y siguientes.

SEPTIMO: Que, respecto al **primer punto de prueba**, conviene señalar que ambos reclamantes, tanto Mauricio Sandon Orellana como María Bernal Tejerina, indicaron en sus respectivos escritos que, las elecciones de la nueva directiva tuvieron lugar el día 18 de noviembre de 2022, no acompañando ni rindiendo prueba alguna que así lo acreditará.

Por su parte, la reclamada, acompañó a fojas 94 y siguientes, el acta de reunión auto convocada más una lista de asistencia en que aparece que, la cuestionada votación se desarrolló el día 15 de noviembre de 2022 en las dependencias de la señalada asociación, ubicadas en la comuna de San Pedro de Atacama.

Merced a los documentos adjuntados por la reclamada, no existe duda para este Tribunal que las referidas elecciones, se celebraron el día 15 de noviembre de 2022.

A la misma conclusión puede arribarse, examinado el acta de reunión auto convocada de igual fecha, remitida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), a fojas 54 y siguientes.





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

OCTAVO: Que, en cuanto al **segundo punto de prueba**, conforme a los estatutos de esta agrupación, rolantes a fojas 61 y siguientes, se establece que, en virtud del artículo 1, la misma se rige por la ley N° 19.253, por la ley N° 19.418 y por las normas estatutarias.

El artículo 36 de la ley N° 19.253, define a la Asociación Indígena, como *“la agrupación voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este párrafo”*.

A su vez, el artículo 37 de la señalada norma, nos indica que: *“Las asociaciones indígenas obtendrán la personalidad jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4° del Título I de esta ley. En lo demás les serán aplicables las normas que la ley N°18.893 establece para las organizaciones comunitarias funcionales”*.

En este punto, conviene precisar que, la ley N° 18.893, fue derogada por el artículo 52 de la ley N° 19.418, publicada en el diario oficial el 9 de Octubre de 1995, y que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, siendo ésta en definitiva la normativa a la cual la presente agrupación deberá ajustar su proceder.

Así, el artículo 21 bis del referido cuerpo legal, dispone que: *“La comisión electoral deberá comunicar al secretario municipal la realización de la elección del directorio con al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha fijada para ella. En caso de omitir esta comunicación, la elección no tendrá validez”*.

A fojas 29 y siguientes, consta el Ord. N°1541/2022, de fecha 15 de diciembre de 2022, remitido por la municipalidad de San Pedro de Atacama, en el cual, ésta comunica en su parte pertinente, que: *“3. Respecto al cumplimiento del artículo 21 bis de la ley 19.418, esta organización no hizo ingreso de comunicación alguna sobre su proceso electoral, no se ingresó ningún documento sobre su proceso electoral en esta municipalidad”*.

Si bien, está sola circunstancia bastaría por sí sola para anular la elección, no es menos cierto que, el examen de los antecedentes acompañados al proceso, nos revela que, en la votación del día 15 de noviembre de 2022, se incurrieron en otros incumplimientos, a saber, no se eligió una comisión electoral que organizará y dirigiera este proceso, conforme lo dispone el artículo 10, letra k) de la ley 19.418. Añadiendo





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

dicha norma que: *“Esta comisión estará conformada por tres miembros que deberán tener, a lo menos, un año de antigüedad en la respectiva junta de vecinos, salvo cuando se trate de la constitución de la primera, y no podrán formar parte del actual directorio ni ser candidatos a igual cargo”.*

En este sentido, el oficio que remite CONADI a esta magistratura, a fojas 53 y siguientes, señala textualmente, en su parte final, que: *“Respecto a la solicitud de acta de establecimiento de comisión electoral y certificados de antecedentes de los socios electos, esta oficina no cuenta con dichos antecedentes”.*

Por lo mismo, tampoco consta que los afiliados interesados en participar del directorio, hayan inscrito su candidatura, a lo menos con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, ante la comisión electoral, conforme lo ordena el artículo 21 de la ley N° 19.418. O bien, que cumplan con los requisitos para postular señalados en el artículo 20 de la señalada ley, entre ellos, tener un año de afiliación, como mínimo, en la fecha de la elección, pues del registro de socios actualizado que, rola a fojas 57 y siguientes, no aparecen las fechas de ingreso de cada uno de los 59 asociados.

Asimismo, al no elegirse una comisión electoral, no se depositó en la secretaría municipal respectiva, dentro del plazo de los 5 días siguiente a la elección, los antecedentes que enumera el artículo 6 inciso 3 de la ley N° 19.418. A saber, a) Acta de elección; b) Registro de socios actualizado; c) Registro de socios que sufragaron en la elección; d) Acta de establecimiento de la comisión electoral; y e) Certificado de antecedentes de los socios electos, emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Respecto de la convocatoria a elecciones, señala el artículo 12 de los estatutos que: *“Las asambleas generales ordinarias se celebraran tres veces al año, y en ellas se podrá tratar cualquier asunto relacionado con los intereses de la asociación y que no sea de conocimiento y resolución de una asamblea general extraordinaria, sin que sea necesario señalarlos en la respectiva citación. Serán citados por el presidente y el secretario del Directorio o quienes los reemplacen, mediante carta o carteles fijadas en la sede de la organización u otras formas de notificación que acuerde la asamblea general”.*

A su vez, el artículo 13, prescribe que: *“Son materias de las Asambleas Ordinarias:*

1. La elección del Directorio y de la comisión fiscalizadora de finanzas”.





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Así, en el expediente no constan las citaciones, llámese carta o carteles, que la presidenta y la secretaria debieron haber emitido convocando a todas las organizaciones afiliadas para la asamblea ordinaria del día 15 de noviembre de 2022.

Sólo figura una carta de suspensión de la referida reunión, acompañada por la propia reclamada, a fojas 102, en la cual la presidenta y secretaria de la asociación la postergan por razones de fuerza mayor para el día 28 de noviembre de 2022, comunicación que fue enviada el mismo día 15 de noviembre, vía correo electrónico, según se lee en documento de fojas 103, a las comunidades que componen esta asociación.

Tampoco, consta el acta de reunión de fecha 8 de noviembre de 2022, en la cual la asamblea habría acordado la realización de estas elecciones, conforme se hace alusión en el contenido del acta de fecha 15 de noviembre de 2022, rolante a fojas 54 y siguientes.

De manera que, al no constituirse una comisión electoral que organizará y dirigiera el proceso eleccionario, y por lo mismo, al no informarse con la debida anticipación a la secretaria municipal de la comuna de San Pedro de Atacama, conforme lo ordena el artículo 21 bis de la ley N° 19.418, se ha incurrido en un vicio insalvable cuya sanción está expresamente establecida en la misma ley, esto es, que la elección no tendrá validez, no pudiendo más que acoger la reclamación en este punto.

NOVENO: Que, en cuanto al **tercer punto de prueba**, consta, a fojas 126, un certificado electrónico de personalidad jurídica, correspondiente a la Comunidad Atacameña de San Pedro de Atacama, emitido el día 14 de febrero de 2022, por la Conadi. En el mismo, aparecen como miembros del directorio, la Sra. María Bernal Tejerina en el cargo de secretaria, y Carolina Mamani Rojas, en el cargo de consejero 1. Conforme a dicho certificado, la fecha de expiración del directorio es hasta el día 4 de enero de 2022.

Por su parte, a fojas 85, figura un nuevo certificado electrónico de personalidad jurídica de la misma comunidad, emitido, esta vez, el 26 de diciembre de 2022 y con fecha de expiración del directorio el 25 de mayo de 2024. En aquel, ya no figuran como miembros de la directiva, María Bernal Tejerina ni Carolina Mamani Rojas.

Finalmente, a fojas 93, la reclamada acompañó un extracto de reunión ordinaria, celebrada el día 4 de junio de 2022 en la comunidad de San Pedro de Atacama, en cuyo contenido se puede apreciar que, a través de una votación la asamblea sanciona





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

a María Bernal Tejerina y a todo el directorio saliente con la prohibición de representar a la comunidad por el lapso de 2 años. Sanción que fue informada a la asamblea de la Asociación Indígena Valle de la Luna, mediante carta de fecha 15 de noviembre de 2022, por la presidenta de aquella comunidad, Sra. Pamela Ibarra Herrera, conforme a documento rolante a fojas 91 y siguientes.

El artículo 5 de los estatutos, señala que: *“Pertenece a la asociación de pleno derecho la Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, la Comunidad Indígena de Coyo, la Comunidad Indígena de Solor, la Comunidad Indígena de Quitor, la Comunidad Indígena de Larache y, la Comunidad Indígena de Séquitor, las que serán representadas por sus dirigentes mayores de 18 años de edad con residencia o domicilio en la comuna de San Pedro de Atacama, mientras dure el termino para el cual fueron elegidos por las asambleas generales de sus respectivas comunidades indígenas constituidas de conformidad a la ley 19.253”*.

De los antecedentes expuestos, es posible colegir que, tanto María Bernal Tejerina como Carolina Mamani Rojas, ya no podían integrar el directorio de la asociación indígena Valle de la Luna, en razón de haber terminado su respectivo período como directoras de la comunidad de San Pedro de Atacama. Por cuanto, con fecha 4 de junio de 2022, la asamblea de dicha organización sancionó a la reclamante y *“a todo el directorio saliente”* por faltas administrativas, según se aprecia en documento de fojas 93. Lo anterior, guarda correspondencia con lo expuesto por la reclamada en su contestación en el sentido de que, en esa comunidad resultó electa una nueva directiva el día 24 de abril de 2022.

De manera que, el hecho de haber sido sancionadas con posterioridad por su propia agrupación, no resulta relevante para resolver la controversia.

DÉCIMO: Que, en cuanto al **cuarto punto de prueba**, consta a fojas 56, el listado de asistencia de las 16 personas que concurrieron a votar el día 15 de noviembre de 2022.

A su vez, a fojas 57 y siguientes, aparece un registro actualizado de socios, de fecha 27 de diciembre de 2022, compuesto por 59 personas. Ambos instrumentos, remitidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de oficio N°200, de fecha 30 de diciembre de 2022, rolante a fojas 53 y siguientes.

De la comparación de ambos, se establece que, de las 16 personas que sufragaron el día de las elecciones, sólo 9 de ellas figuran en el registro actualizado que





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

lleva la CONADI. Por el contrario, los señores Marcelino Ayabire Vilca, Héctor García Mamani, Mailing Cadima Gavia, Daniela Lugo Soza, Vicenta Condori Sandon, Sonia Ramos Chocobar y Gustavo Cruz Reyes, quienes asistieron a votar no aparecen en el señalado registro, desconociéndose si revisten la calidad de socios y si estaban habilitados para votar.

En este sentido, conviene recordar que el artículo 9 de los estatutos, dispone que: *“La Asociación deberá llevar un registro al día de socios, en el que se anotara el nombre, domicilio, y cédula de identidad de cada uno de ellos”*.

Por su parte, el artículo 11, señala, en su parte pertinente, que: *“En las asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, sólo tendrán derecho a voz y voto los dirigentes de las comunidades indígenas que conforman la asociación”*.

En virtud de lo expuesto, queda claro que la Asociación no ha cumplido con su deber de actualizar el libro de socios ni tampoco ha informado a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de las variaciones que ha experimentado aquel registro.

Desde esta perspectiva, se hace necesario precisar que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 19.418, el acto de incorporación a una junta de vecinos y a las demás organizaciones comunitarias es un acto formal, voluntario, personal e indelegable, que consiste en una inscripción en el registro de socios, el que debe contener las menciones que puedan individualizar al socio –**nombre completo, domicilio, cédula de identidad**-, fecha de inscripción con indicación del **día, mes y año** respectivo para acreditar con precisión su antigüedad en la organización; y **su firma**, esto último es la forma de acreditar su voluntad de incorporarse a dicha organización, razón por la cual al no existir un registro de socios o al no actualizarse el mismo, se incurre en una grave irregularidad, no permitiendo a este Tribunal determinar la cantidad exacta de asociados y verificar si los electos cumplían con el período de un año de antigüedad para ostentar dichos cargos.

Refuerza lo anterior, lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 19.418 que ordena: *“Cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un registro público de todos sus afiliados, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos”*.

Así, los vicios constatados en este punto cumplen con el requisito de transcendencia para invalidar el proceso.





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

DECIMO PRIMERO: Que si bien los reclamantes en sus respectivas presentaciones, solicitan la nulidad de la elección de directorio, ocurrida efectivamente el día 15 de noviembre de 2022, el Tribunal en virtud de lo razonado en los considerandos anteriores, haciendo uso de su prerrogativa establecida en el inciso final del artículo 10 de la Ley N°18.593, también anulará la elección de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, realizada el mismo día.

Resultando pertinente aclarar que, los directorios de las organizaciones comunitarias constituidas al amparo de la Ley N° 19.418, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.500 del año 2011, deben elegir una directiva compuesta, a lo menos, **portres miembros titulares, (presidente, secretario y tesorero) e igual número de miembros suplentes**, durando tres en años en el cargo.

Por su parte, la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, estará compuesta por tres miembros, los cuales serán elegidos anualmente por la asamblea general.

DECIMO SEGUNDO: Que acorde con lo expresado anteriormente, se concluye que en la elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora de Finanzas de la “Asociación Indígena Valle de la Luna”, comuna de San Pedro de Atacama, realizada el día 15 de noviembre de 2022, se incurrieron en graves irregularidades al no dar cumplimiento a las normas legales y estatutarias que rigen a dichas organizaciones y que ameritan declarar la nulidad de la referida elección.

Que el resto de la prueba rendida, no altera las conclusiones de este órgano jurisdiccional.

Por estas consideraciones, apreciando los hechos como jurado, y atendido además, lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; artículos 10 y 24 de la Ley N°18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, **SE RESUELVE:**

QUE SE ACOGE la reclamación y se **ANULA** la elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora de Finanzas, practicada el día **15 de noviembre de 2022** en la Asociación Indígena Valle de la Luna, comuna de San Pedro de Atacama.

1.- Facúltese a cualquiera de los reclamantes para que convoquen, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, a una asamblea que tendrá el carácter de extraordinaria, debiendo cumplir con las formalidades estatutarias en cuanto a la publicidad, anticipación mínima de las citaciones a este tipo de asamblea para el efecto de elegir una Comisión Electoral compuesta de





TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

tres miembros, quienes deberán tener, a lo menos, un año de antigüedad en la organización y tendrán a su cargo la elección del Directorio y Comisión Fiscalizadora de Finanzas. Los integrantes de esta Comisión, no podrán ser candidatos a dichos cargos.

2.- Una vez elegida la Comisión Electoral, ésta deberá convocar a elecciones, dentro de los siguientes treinta días hábiles, cumpliendo con las formalidades estatutarias en cuanto a las citaciones a asamblea ordinaria, respetando los plazos de inscripción de candidatos. Además, deberán confeccionar un libro de registro de socios, o bien, actualizar el ya existente, debiendo completar sus datos íntegramente (nombre completo, domicilio, cédula de identidad, fecha de ingreso y firma), respetando siempre la antigüedad de las inscripciones, mantener la correlación de la numeración y evitar la multiplicidad de inscripciones.

Oficiese a la Secretaria de la Municipalidad de San Pedro de Atacama para que publique la sentencia en la página web institucional dentro del plazo de tres días, conforme lo dispuesto en el artículo 25, inciso 3º, de la Ley N°18.593 de los Tribunales Electorales Regionales.

Asimismo, infórmese a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Notifíquese por el Estado Diario.

Hágase devolución de los documentos y archívese en su oportunidad.

Rol 36/2022 y acumulada rol 37/2022.

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, integrado por su Presidenta Titular Ministra Jasna Katy Pavlich Nuñez y los Abogados Miembros Sres. Fernando Andres Orellana Torres y Fabiola Andrea Rivero Rojas. Autoriza el señor Secretario Relator don Marco Antonio Flores Fernández. Causa Rol N° 36-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Antofagasta, 10 de julio de 2023.





50A7AE1A-544B-403C-BCA4-63F5F46BF9B5

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.terantofagasta.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.